

## La resiliencia del autoritarismo madurista

Thomas Posado

Venezuela conoce desde siete años una crisis económica de una amplitud inédita. Según los datos del Fondo monetario internacional (FMI), la economía venezolana se hubiera reducido de 71,98 % entre 2014 y 2020<sup>1</sup>. Un tal derrumbe tiene consecuencias dramáticas en la sociedad venezolana. La Organización de las naciones unidas (ONU) y la Organización internacional para las migraciones (OIM) cifran a 5,4 millones el número de venezolanos que han salido de su país<sup>2</sup>, es decir una de las crisis migratorias más importante del planeta. Gobernar un país en esas condiciones constituye un desafío y la persistencia en el poder de Nicolás Maduro desde 2013 puede constituir una enigma. Como lo escribe Javier Corrales, « la respuesta la más evidente [a esta pregunta] es que Maduro sobrevivió por que se volvió más autoritario<sup>3</sup> ». Estas practicas autoritarias, diversas y variadas en su configuración, permiten a Nicolás Maduro conservar el poder. Su autoridad es tal actualmente que el politólogo Laureano Márquez habla incluso de « antifragilidad » para calificar el régimen venezolano y subrayar así el hecho que cada una de las dificultades que la sociedad venezolana encuentra fortalece paradójicamente el ejecutivo<sup>4</sup>. En 2020, el gobierno Maduro ha logrado una vez más mantenerse en el poder a pesar de la crisis sanitaria provocada por la pandemia de Covid-19, el aislamiento del país orquestado por los Estados Unidos y el anuncio de elecciones legislativas en diciembre, juzgadas fraudulentas por la oposición.

### Una gestión precoz de la pandemia bastante contenida

El desarrollo de una epidemia en una sociedad fragilizada donde los servicios públicos del agua y de la salud son en un estado de deterioro avanzado constituye un reto para los poderes políticos. En un país cuya mayoría de las municipalidades es regularmente privada de agua potable y 93,8 % de los hogares de las diez principales ciudades tienen que almacenarla por culpa de las fallas del sistema de distribución<sup>5</sup>, respetar una medida preventiva tan básica como lavarse regularmente las manos es casi imposible. Sin embargo, la propagación de la epidemia de Covid-19 se quedó bastante tiempo limitada en Venezuela. El gobierno de Nicolás Maduro fue el primero en América Latina a tomar medidas drásticas para enfrentarla. Ya el 16 de marzo, cuando el país contaba solamente 17 personas infectadas, el estado de alarma fue declarado, la actividad escolar suspendida, una encuesta lanzada a través de la plataforma Patria para que cualquier persona presentando síntomas susceptibles de corresponder al Covid-19 pueda declararlo en línea y el confinamiento decretado por la capital del país, Caracas, y seis Estados federales (será generalizado al conjunto del país el día siguiente). Dos

---

<sup>1</sup> FMI, página sobre Venezuela.

<sup>2</sup> Las cifras son actualizadas en: <https://r4v.info/es/situations/platform> (las cifras indicadas son las del 5 de noviembre de 2020).

<sup>3</sup> J. Corrales, "Authoritarian Survival: Why Maduro Hasn't Fallen", *Journal of Democracy*, Vol. 31, n°3, 2020, p. 40.

<sup>4</sup> L. Márquez, "Un régimen antifragilístico", *Tal Cual*, 4 de agosto de 2020, consultado el 25 de agosto de 2020.

<sup>5</sup> Datos del Observatorio Venezolano des servicios públicos (OVSP), diciembre de 2019.

factores explican esta reactividad. Por una parte, una penuria de gasolina amenazaba bloquear de facto el país, lo que incitó el gobierno a anticipar esta parálisis en nombre de la salud pública. Por otra parte, el ejecutivo tenía sin duda consciencia de la fragilidad del sistema sanitario frente a una crisis de esta magnitud.

Los aliados geopolíticos de Venezuela han contribuido a modelar la estrategia de lucha contra la epidemia, con la presencia de médicos cubanos en el territorio desde 2003 o por los envíos masivos por parte de China y Rusia de pruebas rápidas, de mascarillas y de guantes desechables. Al contrario de la mayoría de los países de la región, el gobierno de Maduro ha garantizado la gratuidad de las pruebas de diagnóstico y del tratamiento. Sin embargo, un informe de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios ha revelado que solo el 2,4 % de las pruebas realizadas en el país hasta el 21 de mayo eran pruebas llamadas PCR, es decir que la casi totalidad eran pruebas rápidas poco fiables<sup>6</sup>. Hasta el 15 de mayo, la propagación de la epidemia ha sido muy limitada: según las cifras oficiales, solo 459 casos y 10 muertos fueron censados. Este resultado puede ser puesto al crédito del confinamiento precoz del país, pero también de su relativo aislamiento aéreo.

A partir de mediados de mayo, la epidemia se ha nítidamente desarrollada con un pico en agosto, hasta alcanzar, según las cifras oficiales, 104 177 casos y 916 muertos el 6 de diciembre de 2020 —cifras que quedan sin embargo marginales en comparación de los países vecinos. Paradójicamente, es a partir del 1<sup>er</sup> de junio que el gobierno ha decidido flexibilizar la cuarentena. En los hechos, los venezolanos la sorteaban ya desde varias semanas para generar ingresos y abastecerse en agua, comida, gas... Como en varios países latinoamericanos, cerca de la mitad de la población ocupada se encuentra en el sector informal, y la satisfacción de sus necesidades las más elementales exige salir en la calle diariamente a pesar de los riesgos sanitarios. El desconfinamiento ha sido organizado de manera progresiva, alternando periodo de trabajo y periodo de reconfiamento, según un esquema cinco días/diez días, luego siete días/siete días, y finalmente de manera diferenciada según las regiones y según los sectores económicos<sup>7</sup>.

Las consecuencias políticas de la crisis sanitaria fueron limitadas. Es solamente el 1<sup>er</sup> de junio que los equipos de Maduro y Guaidó se comprometieron ante la Organización panamericana de salud para enfrentar la pandemia. Sin embargo, la crisis migratoria fue fuertemente impactada. Decenas de miles de venezolanos emigrados perdieron su trabajo e intentaron regresar en su país de origen porque no disponían de ninguna protección social en su país de acogencia. Según las autoridades venezolanas, esta inversión de los flujos migratorios representa cerca de sesenta mil personas. El gobierno de Nicolás Maduro les acusó de estar responsables de la propagación de la Covid-19 en Venezuela: primero implícitamente, separando en los balances epidemiológicos diarios los casos “importados” del extranjero y los casos “comunitarios”, y después explícitamente acusando los *trocheros*, los que no respetan las medidas restrictivas de regreso en el país de ser “bioterroristas”, según los propios términos del jefe del Estado.

---

<sup>6</sup> Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, *Venezuela: COVID-19, Flash Update N.º 4*, 22 de mayo de 2020 ([www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ven\\_covid-19\\_flash\\_update\\_no4\\_final\\_en\\_0.pdf](http://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/files/documents/files/ven_covid-19_flash_update_no4_final_en_0.pdf)).

<sup>7</sup> V. Davies, “Un enfermo para atender enfermos: El sistema de salud venezolano ante la llegada del nuevo coronavirus”, *Análisis y Debate*, Rosa Luxemburg Stiftung Oficina Región Andina, n.º 11, julio de 2020.

El 8 de mayo, un informe de la Academia Nacional de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales (Acfiman) venezolana alertó sobre el riesgo de un pico epidemiológico entre junio y septiembre y recomendó a las autoridades de prepararse<sup>8</sup>. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea nacional constituyente y número dos del régimen, reaccionó acusando a los autores del informe de “generar alarma” y amenazándolos explícitamente de detenciones arbitrarias.

En definitiva, Venezuela sufrió menos de la epidemia de Covid-19 que la mayor parte de sus vecinos. Por el gobierno de Nicolás Maduro, esta crisis sanitaria fue una oportunidad de aumentar su control sobre la sociedad y limitar el impacto desastroso de la penuria de gasolina anunciada.

### **Una presión estadounidense contraproducente**

El desarrollo de la pandemia hubiera podido provocar un moratorio sobre las sanciones estadounidenses que asfixian la economía venezolana desde 2017. Sin embargo, la administración Trump eligió endurecer su política con respecto a Venezuela. Si estas medidas no son el origen de la crisis económica, su impacto se vuelve cada vez más importante. La voluntad declarada de Donald Trump permaneció derrocar a Nicolás Maduro. El 26 de marzo, el departamento estadounidense de la Justicia y dos jurisdicciones federales anunciaron procedimientos judiciales contra Nicolás Maduro y una decena de otros dirigentes venezolanos por narcotráfico, ofreciendo quince millones de dólares por toda información permitiendo el arresto o la condena del jefe del Estado. De toda evidencia, este tipo de perseguimientos tiene una geometría variable si comparamos con el destino reservado a Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, acusado por un fiscal federal neoyorkino de haber sido financiado por El Chapo, pero que goza todavía de relaciones diplomáticas muy cordiales con Washington. El 31 de marzo, el gobierno estadounidense propuso un “Marco para la transición democrática de Venezuela”<sup>9</sup> que prevé la instalación de un Consejo de Estado transitorio bipartidista sin Nicolás Maduro ni Juan Guaidó, propuesta rechazada hasta hoy.

El 3 de mayo, 22 mercenarios entraron en la bahía de Macuto, a una treintena de kilómetros de Caracas, principio de la “operación Gedeón” con el objetivo de capturar Nicolás Maduro. Producto de un contrato entre sectores de la oposición y la empresa de seguridad estadounidense Silvercorp, dirigida por Jordan Goudreau, veterano de las fuerzas especiales, el operativo fue rápidamente neutralizado. El gobierno de Maduro acusó rápidamente a los Estados Unidos y Juan Guaidó de haber programado este intento de desembarque. En los hechos, Silvercorp aseguró efectivamente la seguridad de mítines de Donald Trump, así como la del concierto organizado por los cercanos de Guaidó en la frontera colombiana en febrero de 2019, bajo recomendación de la Casa Blanca. El dicho contrato fue efectivamente firmado por Juan Guaidó por 212,9 millones de dólares, honrado solamente a altura de 50 000 dólares. El monto total

---

<sup>8</sup> Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, *Estado actual de la epidemia de la COVID-19 en Venezuela y sus posibles trayectorias bajo varios escenarios*, 8 de mayo de 2020 (<https://acfiman.org/2020/05/08/estado-actual-de-la-epidemia-de-la-covid-19-en-venezuela-y-sus-posibles-trayectorias-bajo-varios-escenarios/>).

<sup>9</sup> US Department of State, “Democratic Transition Framework for Venezuela, Fact Sheet”, Office of the Spokesperson, 31 de marzo de 2020 ([www.state.gov/democratic-transition-framework-for-venezuela/](http://www.state.gov/democratic-transition-framework-for-venezuela/)).

parece sin embargo irrisorio para pretender tomar el control de un país de 30 millones de habitantes, con un ejército fuerte de 365 000 hombres. Otra prueba del amateurismo de esta operación: su evocación pública por el general retirado Clíver Alcalá en marzo de 2020. Sin contar que los atacantes intentaron entrar en el territorio venezolano a plena luz del día, a algunos kilómetros de la capital, en una zona densamente poblada. La probabilidad de éxito de la operación Gedeón estaba casi nula<sup>10</sup>. El vínculo tenue entre Silvercorp y la administración Trump no demuestra tampoco la implicación de su gobierno en la organización de la operación. Sin embargo, su fracaso contribuyó a fortalecer la legitimidad de Nicolás Maduro, dando crédito a su relato de un país cuya soberanía nacional es amenazada por el imperialismo estadounidense, y permitiéndole así remobilizar su base social. Este intento abortado sirvió también de pretexto al fortalecimiento de las prácticas autoritarias.

El endurecimiento de las sanciones extraterritoriales es tal que todo suministro de gasolina se convierte en un enfrentamiento geopolítico con los Estados Unidos, como fue el caso al final de mayo con la llegada de petroleros enviados por Irán. Más allá de la acentuación de la crisis económica y su corolario, el deterioro de las condiciones de vida de la población, la literatura científica demostró la débil eficacia de estas sanciones para impulsar un cambio político, sobre todo cuando golpean todos los sectores de la sociedad, tienen un costo económico mayor y se perpetúan. En los hechos, las medidas coercitivas estadounidenses aumentan la dependencia de la población al gobierno con la distribución irregular de canastas de alimentos por los Comités locales de abastecimiento y de producción (CLAP) para paliar las penurias. Los análisis convergen sobre su carácter contra-productivo<sup>11</sup>.

### **Elecciones legislativas fraudulentas relegitimando Maduro**

Al principio de julio, el Consejo nacional electoral (CNE) anunció la organización de elecciones legislativas el 6 de diciembre de 2020. El desafío es importante, ya que la asamblea nacional es la única institución controlada por la oposición desde 2015. Sus prerrogativas fueron suspendidas por el ejecutivo por sospechas de fraude en la elección de tres diputados de un Estado federado del sur del país, el Amazonas, sin ninguna organización de un nuevo escrutinio. El 5 de enero de 2020, los diputados chavistas eligieron un oponente disidente, Luis Parra, como presidente de la asamblea nacional, pero la oposición reconoce todavía la presidencia de Juan Guaidó, creando nuevos poderes paralelos, cosa que se vuelve común en este Estado.

En el verano de 2020, el poder judicial, favorable a Nicolás Maduro, suspendió las direcciones nacionales de varios partidos de oposición, empezando por Acción Democrática, y nombró direcciones *ad hoc* compuestas de miembros más afines al gobierno. Estos últimos son los únicos que pueden comprometerse en un proceso electoral, utilizando el logo y sus emblemas.

---

<sup>10</sup> M. Sutherland, "¿Cómo fue la parodia venezolana de Bahía de los Cochinos?", *Nueva Sociedad*, mayo de 2020.

<sup>11</sup> S. Gratius, A. Ayuso Pozo, "Sanciones como instrumento de coerción: ¿Cuán similares son las políticas de Estados Unidos y la Unión Europea hacia Venezuela?", *América Latina Hoy*, n° 85, pp. 31-53; M. Sutherland, "Impacto y naturaleza real de las sanciones económicas impuestas a Venezuela", *PROVEA*, 27 de mayo de 2019 ([www.derechos.org/web/wp-content/uploads/SancionesSutherland-1.pdf](http://www.derechos.org/web/wp-content/uploads/SancionesSutherland-1.pdf)).

El mismo procedimiento fue usado contra un partido disidente de la mayoría presidencial, Patria para todos, menos de tres semanas después del anuncio de la creación de una Alternativa popular revolucionaria para participar de manera autónoma a las elecciones legislativas. Esta practica no es nueva: nueve partidos han sido victimas de este tipo de medida desde 2012<sup>12</sup>.

El gobierno de Nicolás Maduro buscó en 2020 mantener un equilibrio entre represión de la oposición y preservación de una fachada democrática para obtener un reconocimiento internacional. El 31 de agosto de 2020, otorgó una amnistía colectiva para 110 oponentes, entre los cuales 23 diputados y 4 suplentes, permitiéndolos así participar a las elecciones legislativas. Estas practicas tuvieron como consecuencia dividir la oposición. Como lo explica Javier Corrales, las practicas autoritarias “pueden tener dos efectos contrarios. O la oposición se escandaliza y se moviliza, o se desmoraliza, se divide y se debilita. En el Venezuela de Nicolás Maduro, la primera reacción dominó durante los años 2013-2017, la segunda prevalece desde el segundo semestre 2017”<sup>13</sup>. Parecería que esta tendencia se confirmó este año. Por una parte, el antiguo candidato de la oposición en las elecciones presidenciales de 2012 y 2013, Henrique Capriles, expresó su voluntad de participar en las elecciones legislativas a pesar del no-respecto de los fundamentos de la democracia representativa, para enfrentar el gobierno en las urnas. Él no alcanzó un acuerdo sobre las condiciones de organización, pero otros oponentes participaron. Por otra parte, María Corina Machado excluyó cualquier participación electoral, rechazando cualquier concesión al régimen de Maduro, y llamando siempre a una intervención militar exterior para “liberar” el país. Entre estos dos polos, le resulta difícil a Juan Guaidó mantener la unidad de las fuerzas políticas de oposición. En semejante configuración, Nicolás Maduro puede mantenerse en el poder fortaleciendo sus practicas autoritarias. Sin sorpresa, su coalición obtuvo 69,3 % de los votos expresados y 256 de los 277 diputados, con una abstención de 69 % según las cifras del CNE.

Podríamos validar la hipótesis de la “antifragilidad” tan Nicolás Maduro parece más enraizado en el poder que nunca. Su autoritarismo inquebrantable como el derrumbe de sus oponentes y del apoyo de sus aliados internacionales han permitido al gobierno sobrepasar una vez más todas las crisis que sufrió el país este año<sup>14</sup>. Sin embargo, las condiciones de vida de los venezolanos son cada vez más difíciles debido a la magnitud de la crisis económica (de la cual el ejecutivo es el primer responsable), de la crisis sanitaria y de las sanciones promulgadas por la administración Trump. La supuesta fuerza del ejecutivo madurista parece sin embargo colgar de un hilo, y cualquier chispa puede encender a este polvorín que es Venezuela.

---

<sup>12</sup> Observatorio Electoral Venezolano, “Decisiones del TSJ impactan el sistema de partidos y la oferta electoral”, *Boletín* n°44, juin 2020.

<sup>13</sup> J. Corrales, “La crise électorale au Venezuela”, in O. Dabène (dir.), *América latina. El año político 2017/ Les Etudes du CERI*, n°233-234, 2018.

<sup>14</sup> T. Porras Ponceleón, “Negociar sin maximizar”, *Política Exterior*, 23 juillet 2020.